

Conflictos por petróleo y gas natural en la Amazonía

Presentación del dossier

Guillaume Fontaine

Profesor Investigador de FLACSO Ecuador.

Desde la década de los noventa, la cuenca amazónica se ha convertido en una apuesta mayor de la globalización, especialmente para la explotación de recursos naturales. No sólo las políticas de conservación y la integración comercial, sino también el narcotráfico, la bioprospección, la explotación intensiva de madera, la minería, la extracción de petróleo y gas natural, las infraestructuras de transporte son algunos de los tantos temas de la agenda internacional que afectan a la selva y a sus habitantes. En el caso particular de los hidrocarburos, la región tiene una creciente importancia estratégica en la gobernanza energética global¹, que viene acompañada con una serie de amenazas para las comunidades locales y el medio ambiente, y que suele reforzar la dependencia de las economías nacionales. Desde luego, no cabe duda de que las políticas energéticas afectarán severamente la región en el próximo medio siglo, no sólo en las áreas de producción sino también en aquellas de procesamiento y transporte.

Es muy sintomático de este fenómeno la multiplicación de los conflictos ambientales en las dos últimas décadas, al tiempo que muchas críticas fueron formuladas en contra de los gobiernos y la industria de hidrocarburos por la deforestación, la contaminación crónica y los derrames masivos de petróleo crudo. Esta situación tiene mucha influencia en las políticas energéticas y económicas, pues algu-

nos conflictos radicales se volvieron obstáculos a mega proyectos como en los bloques 23 y 24 en Ecuador o el bloque Sirirí en Colombia. De hecho, hay un creciente esfuerzo de organización de la sociedad civil para el reconocimiento y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales, así como para una mayor incidencia para la justicia social ante los gobiernos, los organismos de cooperación y las instituciones financieras internacionales. El dossier que presentamos a continuación da cuenta de la complejidad de esos conflictos. Hemos seleccionado los casos más significativos en cuatro países andinos –Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia– para evaluar los alcances de las políticas energéticas en términos de impactos sociales y ambientales.

El balance de cien años de actividades petroleras en Colombia, según Alfonso Avellaneda Cusarí, deja un saldo bastante negativo pues el Magdalena Medio, Arauca, Casanare, el Putumayo y Amazonas son las zonas de mayor inseguridad ambiental y pobreza, a pesar de las bonanzas sucesivas que conllevaron la colonización de estos departamentos. Es más, el mapa petrolífero del país se superpone en gran medida con los escenarios de violencia y de exclusión social. Avellaneda explica que ni la creación del Consejo Colombiano de Seguridad, ni el Plan Nacional de Contingencia han sido suficientes para contrarrestar estos efectos perversos. Últimamente se licitaron millones de hectáreas para la exploración *off-shore*, sin que existiera la necesaria legislación ambiental específica para asegurar la protección de los recursos marinos.

¹ Cf. Varios Autores, 2000, *World Energy Assessment. Energy and the Challenge of Sustainability*, UNDP, New York.

En Ecuador, el artículo de Teodoro Bustamante y María Cristina Jarrín evidencia la correlación entre la presencia de la industria petrolera y la agudización de los déficits de infraestructura, equipamiento y calidad de viviendas, junto con los bajos indicadores de educación, salud y pobreza. A partir de un centenar de variables sociales, estos autores deducen que las actividades petroleras no son un factor determinante de bienestar para las poblaciones amazónicas, aunque no llegan a tratar los impactos ambientales generados por ellas. El artículo de Guillaume Fontaine analiza precisamente la correlación entre la contaminación y la multiplicación de conflictos en las áreas de explotación petroleras administradas por Petroecuador. La mala gestión ambiental en estas áreas crea un entorno hostil y se convierte en un factor de conflictos latentes y difusos. Más aún, la revisión de 2.600 actas de compensaciones, indemnizaciones y medidas diversas firmadas por la empresa estatal ecuatoriana entre 1994 y 2002, deja pensar que tampoco las relaciones comunitarias de la empresa constituyen una respuesta adecuada a las demandas de la población. Al convertirse en un mecanismo de mitigación y resolución de conflictos, estas medidas no permiten una resolución de los problemas estructurales de la región y sus habitantes, lo cual, *in fine*, se vuelve un factor de crisis de gobernabilidad para el país.

En Perú, el caso Camisea constituye un ejemplo más de las dificultades planteadas por la explotación de hidrocarburos en áreas sensibles, como lo explica Carlos Soria. Este autor menciona una serie de informes que denunciaron irregularidades a lo largo del proceso de negociación encabezado por el gobierno y los consorcios encargados de la extracción, el procesamiento y el transporte del gas natural de Camisea. Esta situación ha dado lugar a varias iniciativas por parte de la

sociedad civil, en particular ante el BID, para frenar la ejecución del proyecto. Sin embargo, dada la importancia de los intereses financieros en juego, las medidas tomadas fueron escasas y tanto los estudios de impacto ambiental como los acuerdos de indemnización fueron avalados en un plazo record. Soria concluye en la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la definición y ejecución de la política energética, así como de afianzar los mecanismos de control y rendición de cuentas de las autoridades estatales y del BID.

En Bolivia, los planes de ajuste estructural llevados a cabo desde medianos de los ochenta llevaron a la privatización completa de la empresa nacional YPFB y una política agresiva de licitación de los bloques hidrocarbúferos, así como la intensificación de la explotación de gas natural, como lo recuerda el artículo de Marc Gavaldá. Con una legislación ambiental poco apremiante, la mayoría de las áreas protegidas y de los territorios indígenas se superpusieron con el mapa energético del país, generando numerosos conflictos ambientales. Los más significativos son los que desató la construcción de tres gasoductos, a lo cual se sumó la “guerra del gas” provocada por el proyecto de exportar gas líquido por Chile.

La impresión general que se destaca del conjunto de artículos es que los impactos sociales y ambientales de las actividades hidrocarbúferas no han sido tomados en cuenta de manera satisfactoria, ni por la industria ni por las autoridades públicas. En este sentido es que se convierten en un problema de gobernabilidad democrática, entendida aquí como el equilibrio entre las demandas sociales y las respuestas del sistema institucional². Ahora bien, la manera en que se definirán las políticas públicas en los próximos años determinará la capacidad de los países amazónicos de enfrentar este reto, de tal modo que los conflictos ambientales no se vuelvan factores de una crisis social y ambiental en la región.

2 Cf. Antonio Camou, 2001, “Estudio preliminar”, en A. Camou *et al.*, 2001, *Los desafíos de la gobernabilidad*, FLACSO, Plaza y Valdés, México, p. 39.